



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
UNIDAD DE INSPECCIONES DE POLICÍA
INSPECCIÓN 7 A DE POLICÍA URBANO DE PRIMERA CATEGORÍA

RESOLUCIÓN NÚMERO 059 DE 2024
(09 DE FEBRERO DE 2024)

Por medio de la cual se revoca la Resolución No.174/2020 del 11 de diciembre de 2020 emitida por la Inspección 7ª de Policía.

LA INSPECTORA 7A DE POLICÍA URBANO DE PRIMERA CATEGORÍA

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial por las conferidas por la Ley 1801 de 2016, en consideración a los siguientes

HECHOS

1. El día 07 de diciembre del año 2020, el S.I. Edwin Velásquez con placa 193305 de la Policía Nacional emitió orden de comparendo **No.05-001-6-2020-158408** a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.216.713.443** por la presunta contravención al artículo 92 numeral 16 de la Ley 1801 de 2016.
2. Se radica el proceso bajo radicado No. 2-33113-20 en la Inspección 7ª de Policía por incurrir en los comportamientos contrarios consagrados en el artículo 92, Numeral 16 de la Ley 1801 de 2016 y en consecuencia, el 11 de diciembre de 2020 el Inspector 7A de Policía Urbana, Wilder Alonso Zapata, emitió la Resolución No.174-2020 "**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN**" y en dicho acto administrativo el funcionario resolvió:

PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes **LA MEDIDA CORRECTIVA**, de que trata el numeral 16, parágrafo 2 del artículo 92 de la Ley 1801, impuesta por la Policía Nacional a la señora ESTEFANIA DURANGO TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía 1.216.713.443, mediante comparendo No. 5-1-100763 del 7 de diciembre del 2020, consistente en **MULTA GENERAL TIPO 4**, por incurrir en un comportamiento contrario que afecta actividad económica, tipificada en el artículo 92, numeral 16, de la Ley 1801 de 2016 (...).

3. El 08 de febrero de 2024, la Inspectora de Policía Sandra Milena Osorio avoca conocimiento de los hechos del proceso bajo radicado **No. 2-33113-20** y por ende, emprende el análisis del caso en concreto.

CONSIDERACIONES

La función de policía surge el principio constitucional estatuido en el artículo 2º inciso 2 de la Constitución Política de Colombia, que impone a las autoridades de

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

la República la obligación de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y es precisamente en virtud de este postulado que se posibilita a las autoridades de policía el regular los derechos y libertades de los ciudadanos en aras de mantener el orden público interno y la pacífica convivencia social propendiendo por el bienestar general.

Esta limitación se ejerce, entre otras cosas, mediante la expedición de regulaciones generales del comportamiento ciudadano, en virtud del denominado poder de policía, cuyo acatamiento corresponde verificarse a través del ejercicio de la función de policía dentro de los marcos allí impuestos en los artículos 11 a 16 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que contienen las definiciones del Poder y la Función de policía, entendiéndose el primero como la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento. Y de otra parte la Función de Policía, siendo ésta la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del Poder de policía, función que se cumple por medio de órdenes de policía.

En ese sentido, atendiendo a los principios de proporcionalidad y necesidad consagrados en el artículo 8 de la Ley 1801 de 2016, las autoridades de policía solo podrán adoptar medios y medidas correctivas razonables, estrictamente necesarios e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público en consideración a cada caso en concreto.

En el caso bajo estudio, el proceso con radicado **No. 2-33113-20** se originó con la emisión de la orden de comparendo **No.05-001-6-2020-158408** del día **07 de diciembre del año 2020** a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.216.713.443**, en donde el Subintendente de la Policía Nacional no impone medidas correctivas y ante la presunta contravención al artículo 92 numeral 16 de la Ley 1801 de 2016, señala que procede la medida correctiva de multa general tipo 4.

No obstante, el 11 de diciembre de 2020 el Inspector 7A de Policía Urbana, Wilder Alonso Zapata, emitió la Resolución No.174-2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN" y en dicho acto administrativo el funcionario resolvió:

PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes **LA MEDIDA CORRECTIVA**, de que trata el numeral 16, parágrafo 2 del artículo 92 de la Ley 1801, impuesta por la Policía Nacional a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA**, identificada con cédula de ciudadanía 1.216.713.443, mediante comparendo No. 5-1-100763 del 7 de diciembre del 2020, consistente en **MULTA GENERAL TIPO 4**, por incurrir en un comportamiento contrario que afecta actividad económica, tipificada en el artículo 92, numeral 16, de la Ley 1801 de 2016.

Centro Administrativo Distrital CAD

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144

Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA**, identificada con cédula de ciudadanía 1.216.713.443, en los términos previstos en la ley 1801 de 2016 código Contencioso Administrativo.

TERCERO. Remitir las presentes diligencias a la Estación de Policía Catilla para que realice el registro en el RNMC. (Registro Nacional de Medidas Correctivas) y efectúe la notificación de la presente decisión, por el medio más eficaz y expedito.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Aunado a lo anterior, atendiendo a la falta de claridad, expresividad y exigibilidad del acto administrativo emitido por el funcionario, no fue posible la emisión de la cuenta de cobro a la ciudadana ya que en el documento no se indicó el valor de la multa impuesta (en números y letras) ni el término concedido a la infractora para su correspondiente pago, desatendiendo así los criterios consagrados en la Circular 080 de 2017 emitida por la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín e impidiendo la facturación y posterior cobro de la mencionada multa.

Asimismo, al revisar la Resolución No.174-2020 del 11 de diciembre de 2020, se observa que el Inspector de Policía impone la medida correctiva de multa general tipo 4 y en el numeral cuarto de la parte resolutive indica que no proceden recursos frente a su decisión vulnerando el debido proceso de la señora **DURANGO TABORDA**, quien de conformidad con el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 tenía derecho de interponer recurso de reposición y en subsidio apelación ante la imposición de la multa.

Lo anterior obedece a que de acuerdo a lo consagrado en el literal h, numeral 6 del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 a los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores les corresponde conocer en primera instancia de la aplicación de medida correctiva de multa.

Por lo expuesto, esta servidora considera pertinente en aras a salvaguardar los derechos fundamentales de la señora **DURANGO TABORDA** llevar a cabo la revocatoria directa de la Resolución No.174-2020 del 11 de diciembre de 2020. Por consiguiente, en la medida en que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia- Ley 1801 de 2016 no regula sobre la revocatoria directa de los actos administrativos, se deberá tener en cuenta lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 que reza a su tenor:

Artículo 8°. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.

En ese orden de ideas, resulta pertinente acudir de manera analógica al régimen que para casos similares se prevé en las leyes generales de procedimiento tanto administrativo como civil, conforme a los cuales el artículo 93 y siguientes de la



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Ley 1437 de 2011, consagran las causales, procedencia, oportunidad y efectos de la revocación de actos administrativos de carácter general y particular.

En lo concerniente a la revocatoria directa de los actos administrativos, resulta procedente invocar el pronunciamiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la Sentencia 44333 del 23 de marzo de 2017 donde se afirma:

Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los proferieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el artículo 69 del cca: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la norma vigente para la ocurrencia de los hechos es la Ley 1437 de 2011, que trae el mismo postulado en su artículo 93 en los siguientes términos:

Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.*

De esta manera y una vez descritas las circunstancias particulares del caso en estudio, se permite entrever que este materializa la causal expuesta en el primer numeral del articulado ya que al negarle a la ciudadana la posibilidad de presentar recursos frente a la decisión asumida por el funcionario, se vulneró el debido proceso de la interesada toda vez que no pudo ejercer su derecho a la defensa y contradicción en el proceso.

El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual es el pilar fundamental del Derecho Procesal y se expresa en la exigencia de unos procedimientos en los que debe respetarse un marco normativo mínimo en pro de la búsqueda de justicia social.

En este sentido la Sentencia C-339 de 1996, la Corte Constitucional reitera la jurisprudencia sobre este tema en los siguientes términos:

La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969 (Artículos 8 y 9) no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características.

El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.

Igualmente, la Sentencia T-018 DE 2017 definió el derecho a la defensa como *"oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga"*.

Por lo expuesto, su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.

Así las cosas, ante la flagrante vulneración al debido proceso de la ciudadana, este Despacho revocará la Resolución No.174-2020 del 11 de diciembre de 2020 en observancia al numeral primero del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, se hace la ficción de la no ocurrencia de los hechos y de lo decidido en el marco del proceso con radicado No.2-33113-20.

Es preciso mencionar que los efectos de la revocatoria directa de acuerdo a la norma son aplicados de manera retroactiva, es decir, hacia el pasado o como lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado *"ex tunc"* en Sentencia emitida 15 de agosto de 2013 y cuyo Consejero Ponente fue Gerardo Arenas Monsalve:

En este punto reitera la Sala, que la revocatoria de un acto administrativo no trae implícito restablecimiento alguno de los daños o perjuicios que el acto objeto de dicha decisión pudo generar durante el tiempo que se encontró vigente en el ordenamiento jurídico puesto que la decisión de la administración, en este sentido, no implica en estricto sentido un juicio de legalidad, conforme a las causales previstas en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con efectos ex tunc, esto es, retrotrayendo las cosas a su estado inicial. En efecto, como se anunció en precedencia, se requiere de un pronunciamiento judicial para que proceda el reconocimiento de los daños y perjuicios que pudo ocasionar un acto administrativo revocado, durante su vigencia (...) (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 2166-07, 2013)

Sin más consideraciones, la **INSPECTORA 7A DE POLICÍA URBANA DE PRIMERA CATEGORÍA**, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial por las conferidas por la Ley 1801 de 2016,



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No.174/2020 del 11 de diciembre de 2020 emitida por la Inspección 7ª de Policía, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a la señora **ESTEFANIA DURANGO TABORDA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.216.713.443, por el medio más expedito

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que contra esta resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Hacer las anotaciones respectivas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas- RNMC.

ARTÍCULO QUINTO: ANEXAR la presente actuación al expediente con radicado 2-33113-20, para que haga parte integral del mismo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los 09 días del mes de febrero de 2024.

SANDRA MILENA OSORIO AGUDELO
INSPECTORA 7A DE POLICÍA URBANA DE MEDELLÍN

Proyectó y Elaboró
Cinthya Arcila Carmona- Abogada apoyo jurídico



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740